

TRIBUNA | ECONOMÍA Ante las advertencias sobre la descompensación del sistema público de pensiones, la autora reflexiona sobre la eventualidad de un conflicto intergeneracional sobre la distribución de los recursos públicos

Jubilados, mayores y falsa conciencia

ELISA CHULIÁ

LA ENCICLOPEDIA Herder define «falsa conciencia» como una «opinión ideológica que no se corresponde con la situación real de quien la posee». Este concepto me vino a la mente cuando el pasado 1 de octubre, a propósito del Día Internacional de las Personas Mayores, una de las asociaciones de pensionistas y jubilados más relevantes de España publicó una nota que terminaba con esta frase, resaltada en negrita y mayúsculas: «Ha llegado la hora de retomar el protagonismo que la sociedad, la pandemia y la crisis económica nos han arrebatado».

Proclamas semejantes movilizan a muchos mayores, como evidencian las manifestaciones de pensionistas que han tenido lugar en gran parte del territorio nacional desde 2018 en defensa de pensiones «dignas» y «blindadas en la Constitución». ¿Pero realmente tienen las personas mayores en España razones fundadas para afirmar que el resto de nuestra sociedad no las toman en consideración, que la pandemia las ha invisibilizado o que la crisis económica las ha golpeado de manera especialmente intensa? ¿Pueden presentarse como damnificados quienes pertenecen a un colectivo que no deja de ganar peso en la población y en las urnas, mientras obtiene unas rentas protegidas de los riesgos del ciclo económico y a las que el Estado dedica cada vez más recursos?

El protagonismo demográfico de las personas mayores parece imparable. Si tomamos la referencia convencional de los 65 años, la proporción de población residente en España que ya ha cumplido esa edad aumenta año tras año (también lo hizo durante la pandemia). En 2022 alcanza el 20% y, según estimaciones del propio Gobierno (2021 Ageing Report), al final de esta década podría acercarse a una cuarta parte, rozando entre 2040 y 2050 un tercio de la población. Esta evolución demográfica desequilibra la composición del electorado: los mayores no solo son cada vez más (en términos absolutos y relativos), sino que también votan más (o se abstienen menos) que los jóvenes, lo que acrecienta su influencia electoral.

«¡Pues qué poco nos luce económicamente ese creciente protagonismo demográfico y electoral!», replicarán seguramente muchos mayores. Este lamento tampoco resiste el contraste con la realidad. De los cerca de 9,4 millones de personas que actualmente cuentan más de 64 años, la gran mayoría vive de sus pensiones de jubilación, un derecho que han adquirido contribuyendo durante al menos 15 años a la Se-

guridad Social. La media de los 6,2 millones de estas pensiones concedidas actualmente por el sistema de la Seguridad Social asciende a 17.500 euros anuales brutos, una cifra que parecerá escasa a quienes la comparen con, por ejemplo, el salario medio anual de los trabajadores (por cuenta ajena y con jornada completa) entre 25 y 34 años: en torno a 22.000 euros (antes de retenciones a cuenta del IRPF). Ahora bien, la comparación no debería hacerse entre cifras absolutas, sino en relación a la estructura del gasto de cada grupo. Los trabajadores jóvenes se hallan en la fase de arranque y desarrollo de su proyecto de hogar y familia, con todos los gastos de vivienda y crianza de menores que ello conlleva. En cambio, el grueso de los pensionistas reside en inmuebles de su propiedad ya pagados y tiene hijos e hijas con capacidad de desempeñar trabajos retribuidos.

Es cierto que alrededor del 50% de las pensiones de jubilación no llegan a 1.000 euros, pero ello no se debe a una injusticia generada por el sistema, sino a las trayectorias laborales de los pensionistas (o cotizaron por bases bajas mientras trabajaron o cuentan con carreras de cotización relativamente cortas o han sufrido la aplicación de coeficientes reductores de la pensión por jubilarse anticipadamente). En realidad, salvo en aquellos casos en los que los trabajadores han cotizado durante más años de los establecidos para acceder al 100% de la base reguladora, el sistema de pensiones español provee prestaciones comparativamente generosas, no solo teniendo en cuenta la tasa neta de sustitución (porcentaje de la primera pensión respecto al último salario), sino también la tasa interna de rendimiento (la rentabilidad real de las cotizaciones). En efecto, el primer pago que cobra el/la pensionista cuando se jubila, representa, de media, el 80% del último salario, por encima de Francia (74%), Bélgica (62%), Suecia (56%) o Alemania (53%). Por otra parte, según cálculos de diferentes autores, el sistema devuelve a los pensionistas, por cada euro cotizado, bastante más de un euro de pensión, si bien las ganancias difieren según el tipo y el importe de la prestación.

¿Acaso no es estúpido que un sistema de pensiones proporcione elevadas tasas de sustitución y retorno? Lo es, pero siempre que no plantee problemas de sostenibilidad financiera; es decir, siempre que el día de mañana sea capaz de seguir pagando esas pensiones a las generaciones de cotizantes actuales, sin tener que dedicar a ello recursos que comprometan (además del cumplimiento de las reglas fiscales que en cada momento rijan) la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos no pensionistas ni el crecimiento de la economía y su capacidad de generar empleo. Los gobiernos (no solo el actual, también los anteriores) insisten en que la sostenibilidad de las pensiones está garantizada con las reformas parciales que van acometiendo, pero los expertos (incluidos los adscritos a organismos públicos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) comparan, con un amplísimo consenso, serias dudas sobre la eficacia de tales arreglos para contener el crecimiento esperado del gasto en pensiones.

En lugar de reclamar al Gobierno que responda convincentemente a esas dudas, sin menospreciar los conocimientos y la honestidad intelectual de los expertos, las organizaciones de pensionistas exhortan a seguir luchando por pensiones más altas y sujetas a una revalorización constitucionalmente garantizada (siempre que el IPC registre un valor positivo). Lo hacen aun sabiendo que los pensionistas constituyen el único colectivo cuyos ingresos principales van a revalorizarse de acuerdo con el IPC, lo que (si se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado) elevará el gasto en pensiones, en 2023, a casi 191.000 millones de euros, un 70% del gasto social total (y un 11,4% más que el pasado año). Así, entre exhortaciones y quejas, refuerzan la falsa conciencia que muchos y muchas mayores y pensionistas tienen de su propia situación. Lástima que, debiéndoles tanto quienes formamos las generaciones que ahora financiamos sus pensiones, podamos acabar considerándolos insolidarios.

LA PREGUNTA surge casi sola: ¿estamos abocados a un conflicto intergeneracional sobre la distribución de los recursos públicos? Depende de lo que entendamos por este concepto. Una batalla abierta, encabezada por líderes de asociaciones representativas de diferentes generaciones, no parece probable. La familia, la institución social más valorada por los españoles, actúa como un potente amortiguador de un enfrentamiento semejante (¿quién saldría a la calle a protestar por el creciente coste que suponen las pen-

siones de sus padres o abuelos?). Sin embargo, sí cabe imaginar la expresión pública de malestar por parte de los jóvenes con dificultades para conseguir ingresos regulares que les permitan realizar sus planes de vida. Elevar la voz, hacer que se escuchen sus intereses, sería para ellos una opción. La alternativa, plantearse la salida hacia países cuyos Estados los traten más equitativamente y les ofrezcan mejores perspectivas de prosperidad, resultaría más gravosa para España, porque los que parten suelen ser los más preparados, los más emprendedores; en definitiva, aquellos de los que nuestra sociedad y economía no deberían prescindir nunca.

Elisa Chuliá es profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas



JAVIER OLIVARES

Cabe imaginar la expresión pública de malestar por parte de los jóvenes con dificultades para realizar sus planes de vida